

(III)

Mientras que la Unión India resolvía favorablemente su confrontación militar con el Pakistán y al propio tiempo que el Congreso ratificaba de forma clamorosa su predominio político, los problemas sociales y económicos —cuya resolución había constituido la plataforma electoral de Indira Gandhi— manifestaban una evidente agravación.

A ello contribuía la indescriptible sequía que azotaba el país en 1972. Cientos de miles de cabezas de ganado morían por falta de pastos; el agua potable se vendía a precios exorbitantes; muchos miles de familias se veían precisadas a abandonar sus hogares al haberse transformado los campos en criales de tierra calcinada. Las cosechas de verano de ese año, a falta de un mínimo de lluvia, se habían mermado a menos de la mitad y resultaba imposible plantar el arroz de invierno. Así, el hambre, esa plaga endémica en la India, adquiría tintes pavorosos. No obstante, salvo casos aislados de pillaje y saqueo, las muchedumbres, habituadas a la escasez, soportaban con estoicismo las calamidades. Especialmente las castas inferiores, sometidas a inhumanas discriminaciones: «a los intocables se les ha negado el acceso a los pozos pertenecientes a los miembros de castas superiores»¹, condenándoles a morir de sed. Aunque las reservas gubernamentales de alimentos, según ciertas informaciones solventes, bastaban a cubrir las necesidades de la mitad de la población, se guardaban para el caso de que el hambre adquiriera proporciones de hecatombe. Mientras tanto, para mitigar la situación, se votaban créditos extraordinarios para obras públicas, a fin de dar trabajo a una parte de los campesinos desplazados de su residencia habitual.

Destacaba, en irritante contraste con esta situación trágica, la acción de ciertos grupos de especuladores —bien apoyados en los círculos gubernamentales—, que aprovechaban las circunstancias para amasar grandes fortunas

¹ GÉRARD VIRATTELLE: «A défaut d'un plan à long terme», *Le Monde*, 20 octobre 1972.

comprando simientes y abonos para revenderlos a precios exorbitantes. Lo más significativo es que el panorama se agravaba con el transcurso del tiempo. Cada vez que se producía una de estas catástrofes, los resultados eran más trágicos que en la ocasión anterior: «el déficit alimenticio tiende a aumentar debido no solamente a la sequía, sino también al aumento de la población», según declaraba una autoridad gubernamental.

La inflación proseguía a ritmo galopante; los precios experimentaban un alza media del 12 por 100 en los artículos de primera necesidad y las reservas de cereales disminuían a razón de un millón de toneladas mensuales. Los embalses se agotaban y provocaban el descenso de la producción de energía hidroeléctrica. Como consecuencia, muchas fábricas tenían que cerrar o disminuir sus horas de trabajo. Las restricciones afectaban principalmente a las regiones industriales del país. Todos estos factores agudizaban el malestar y daban origen a grandes protestas en todo el país. El presidente del PC pro soviético, Dange, era detenido en Bombay el 4 de octubre de 1972 cuando encabezaba una manifestación «contra el paro y el alza de los precios». Otros 6.000 comunistas de dicho partido, favorable a Indira Gandhi, eran detenidos en diversas poblaciones. En Calcuta, 200.000 personas recorrían las calles, convocadas por el PC marxista, para protestar contra la gravedad de la situación económica y la incapacidad de los gobernantes para resolverla. La reforma agraria sólo había permitido recuperar un millón de hectáreas en toda la India, lo que indicaba que muchos propietarios seguían percibiendo fuertes ingresos de unas tierras que no trabajaban directamente, sino que tenían arrendadas en condiciones leoninas. Los Estados más pobres y más afectados por la sequía (Andhra-Pradesh y Bihar) resultaban ser aquellos en que prevalecía con más fuerza esa injusta situación.

No ha de resultar, por tanto, sorprendente que, debido a la crítica situación y a otros muchos factores, en Andhra-Pradesh se exasperasen las tendencias separatistas. Este Estado, como otros muchos de la Unión, englobaba en sus artificiales fronteras regiones muy diversas y heterogéneas poblaciones. Con epicentro en la capital, Hyderabad, se extiende el territorio de Telengana, semiárido y muy pobre, cuyos habitantes sufren la concurrencia, en materias de empleos, de las poblaciones costeras de Coromandel y del golfo de Bengala, que poseen mayor instrucción. Para proteger a los originarios de Telengana de esta competencia, el Tribunal Supremo dictaba una disposición declarando que en las vacantes a los puestos administrativos y educativos serían atendidos preferentemente los habitantes del Estado origi-

narios de Telengana. Inmediatamente se desencadenaba la protesta de los costeros, que temían verse en la necesidad de ceder sus empleos administrativos, y las algaradas alcanzaban en noviembre de 1972 tales caracteres, que se producían 25 muertos y grandes devastaciones: trenes saqueados e incendiados, estaciones asaltadas, etc. Después de cinco semanas de luchas raciales, el Gobierno central se veía obligado a dictar una serie de medidas de compromiso, destinadas a prevenir el desmembramiento del Estado. Según esta solución, los telegus o nativos de Telengana, conservarían sus privilegios para el acceso a la función pública hasta 1977 solamente en la ciudad de Hyderabad, y hasta 1980, en el resto de la región.

Pero la solución no llegaba a satisfacer a las masas, ya que se había creado un clima de verdadero antagonismo entre las poblaciones de Telengana y del litoral que reclamaban la división del Estado. Nueva Delhi se veía en la necesidad de tomar a su cargo la administración directa, sin que por ello se apaciguase la tensión, que, por el contrario, se agravaba hasta límites extremos. Los separatistas redoblaban sus manifestaciones y en los choques se producían numerosas víctimas, que sobrepasaban el medio centenar en febrero de 1973. El conflicto dejaba al descubierto los profundos antagonismos que subyacen en el explosivo subcontinente indostánico: antagonismos de castas y religiones, diferencias históricas e intereses económicos contrapuestos. Ni siquiera el factor lingüístico, que es el causante de tantos conflictos en la India, puede ser el vínculo unificador de estas multitudes que tienen entre sí tan pocos lazos en que basar su convivencia. La prueba de ello es que la reorganización administrativa de los Estados de la Unión se practicó, de 1953 a 1956, sobre la base lingüística para eliminar este factor de discordia. En 1953, el Gobierno central escindía el Estado de Madrás en dos: Tamil-Nadu, de lengua tamil, y Andhra-Pradesh, de lengua telegu. Nueva Delhi, al aplicar esa política, se basaba en la suposición de que el principal factor de unidad de cada Estado consistía en la lengua hablada por sus pobladores. Los acontecimientos que acabamos de relatar destruían esa teoría porque demostraban con claridad que tampoco la unidad lingüística significaba forzosamente la viabilidad de un Estado, y precisamente para colmar sus aspiraciones se había declarado el preferente derecho de sus habitantes a los empleos administrativos. Indira Gandhi, con harta razón, denunciaba con asperza los «chauvinismos provinciales». Nueva Delhi se encontraba ante la disyuntiva de que si aceptaba la partición de Andhra-Pradesh para calmar los ánimos—después de que en 1969 hubiese accedido

a ciertas reivindicaciones en el Pundjab—, se crearía un peligroso precedente que podría conducir a la pulverización de la Unión en una infinita serie de microestados que complicarían la ya ingente tarea administrativa. Tanto más por cuanto que el 21 de enero de 1972 se habían creado tres nuevos Estados—Meghalaya (hasta entonces territorio autónomo del Estado de Assam), Manipur y Tripura (antiguos territorios de la Unión)— y dos territorios—Mizoram y Arunachal-Pradesh— que formaban parte de Assam.

A mediados de febrero de 1973, Andhra-Pradesh se hallaba sumida en el caos: el tráfico ferroviario se encontraba paralizado por haberse destruido estaciones y material; resultaba imposible la circulación de automóviles, puesto que cada pueblo o aldea había erigido barricadas en las carreteras; los funcionarios estaban en huelga, así como los médicos y abogados; las Universidades habían sido clausuradas, etc. Por doquier flotaba la bandera de Andhra y los separatistas se habían adueñado de la calle, ocasionando inmensos daños a los bienes públicos.

La situación se normalizaba a finales de ese año cuando las autoridades centrales imponían una solución a los separatistas, manteniendo, por lo menos de momento, la integridad del Estado. Aunque el compromiso era rechazado por los elementos más radicales de ambas partes—Telengana y Andhra—, era aceptado por la mayoría de los miembros del partido del Congreso, que domina la política local. Se trataba de una tregua provisional, porque persiste, en el fondo, el afán secesionista del país Andhra, territorio litoral rico y fértil, especialmente en los deltas de los ríos Godavari y Krishna, que desea beneficiarse por sí sólo de sus recursos, no compartiéndolos con la árida y paupérrima Telengana. Cuando prevalece tan feroz insolidaridad resulta muy difícil mantener optimismo acerca del futuro de la Unión India.

Realmente, a primeros de 1973, la Unión India mostraba un inquietante panorama interno. Los problemas (hambre, paro, injusticias sociales, tendencias centrífugas, etc.) eran, en definitiva, los mismos que habían aquejado al subcontinente durante muchos siglos, pero ahora habían adquirido una gravedad inusitada merced a dos factores que los hacen explosivos: de una parte, la presencia de organizaciones radicalmente extremistas que predicaban la violencia entre unas masas tendentes a la resignación fatalista; de otra, el incremento demográfico, que había multiplicado varias veces las ya inmensas masas de antaño, transformándolas en un hervidero humano, en

el que la conquista del pan cotidiano incitaba al empleo de todos los recursos de la imaginación.

El Congreso tenía plena conciencia de que la consolidación del éxito alcanzado en los comicios dependía en grado superlativo de que el Gobierno aplicase las reformas socioeconómicas que había prometido durante la campaña electoral. Para estudiar las reformas a finales de diciembre de 1972, el Congreso celebraba una asamblea plenaria en Calcuta—la primera desde 1969—, en la que se acordaba la distribución de lotes de tierra a título de reforma agraria. Se aprobaba una moción mediante la cual el Estado se hacía cargo del comercio al por mayor del trigo y del arroz y se crearía inmediatamente una «organización permanente» para la venta de productos de primera necesidad. Finalmente se adoptaban una serie de resoluciones para remediar la falta crónica de algunos artículos (aceite vegetal, azúcar, abonos, acero, cemento, etc.) y para la creación de medio millón de puestos de trabajo.

Se trataba, por tanto, de alcanzar objetivos concretos de urgencia inapreciable. Algo muy distinto es la viabilidad de los mismos. Algunos técnicos auguraban la imposibilidad de cumplir el programa aprobado en Calcuta. Entre los obstáculos que había de ofrecer su puesta en marcha, ocupaba un lugar no despreciable la falta de entendimiento entre los dirigentes. El programa—ni revolucionario ni siquiera expresivo del «nuevo orden social» con que lo presentaba el Congreso—podía resolver muchas dificultades si era aplicado en su totalidad y con energía. Pero si se adoptaba parcialmente y se ponía en marcha con timidez, estaba condenado al fracaso. Por ello resultaba desalentador que en los círculos gobernantes abundasen las personalidades vacilantes, incapaces de amoldarse a las urgentes realidades, partidarios de soluciones ambiguas, en vez de enfrentarse con decisión a los problemas candentes. En último término, el programa de Calcuta no alcanzaba a ser por ningún concepto el plan de largo alcance que la India necesita para acomodar sus estructuras. Pero sí resultaba positivo como remedio de urgencia, en espera de poder trazar otro más amplio. No obstante, las vacilaciones en aplicar las resoluciones adoptadas en la capital bengalí comenzaban sólo horas más tarde desde que concluyera la asamblea.

El presidente del Congreso afirmaba que, mediante el programa, el partido gubernamental había «ganado la batalla ideológica», sin reparar en que sólo la aplicación correcta del mismo—y no su mero enunciado—podría conducir al pregonado éxito. Indira Gandhi, a su vez, evocaba las «tendencias

calculadas emprendidas por elementos destructores para sembrar la inquietud y el desorden». Estas palabras sibilinas parecían indicar que ya se trataba de buscar una excusa para el caso de un fracaso en la aplicación del programa. Tal vez se tenía conciencia de que en el propio Congreso existían potentes centros de presión—a cuyo apoyo no se podía renunciar—opuestos a toda actuación progresista. *Time of India* sacaba parecidas conclusiones al escribir que, «como es habitual en el Congreso, las decisiones penosas se dejan para el día de mañana».

Esta es la grave opción de la India actual. El fermento revolucionario está más extendido de lo que muchos creen. El Congreso está siendo respaldado por una mayoría deseosa de reformas sociales dentro del orden, pero si se comprueba, reiteradamente, que los problemas acuciantes no se contemplan de forma decididamente constructiva, las masas perderán, algún día, la fe en el Congreso y el país será sacudido.

Mientras tanto, el problema alimenticio se agravaba. El Gobierno decidía, en febrero, importar millón y medio de toneladas de trigo y mijo. Este tonelaje bastaba sólo para cubrir una parte de las necesidades, ya que se calculaba que, en los próximos meses, sería necesario importar otros cinco millones de toneladas para empalmar con la cosecha de invierno. Los Estados de la llanura del Deccan (Maharashtra, Andhra-Pradesh, Madhya-Pradesh) eran los más afectados por la sequía, pero también experimentaban las desastrosas consecuencias Guyerate y Rajasthan. En total, unos 20 millones de personas sentían los efectos del hambre.

Ante una situación semejante, el Gobierno de Nueva Delhi se encontraba ante el imperativo moral de «acelerar el crecimiento económico en la justicia social y la autosuficiencia», según había prometido durante la campaña electoral. El objetivo de ampliar la justicia social no sólo es un elemental deber de ética, sino también de política. Puesto que mientras existan en la India cientos de millones de seres reducidos a la miseria o amenazados por el hambre, y mientras mueran millones de ellos por falta de alimentos o por las enfermedades derivadas de insuficiencias alimenticias, el porvenir de la Unión India seguirá amenazado. Ni siquiera el Congreso estará consolidado en estas condiciones. aun en medio de unas multitudes tan resignadas como las de la India. Pues bien, el presupuesto aprobado el 28 de febrero de 1973 por el Parlamento de Nueva Delhi destinaba el 20 por 100 del gasto total a las atenciones militares: desarrollo de la fabricación de aviones de caza y helicópteros, compra de cohetes

suelo-aire británicos, radares, fragatas, etc. En unas condiciones tan dramáticas, se nos antoja difícilmente justificable este dispendio. Si consideramos que en el ejercicio de 1973-74 la India contaba con recibir 4.000 millones de rupias de ayuda extranjera, se agrava la injusticia, puesto que induce a pensar que una parte de esos fondos, que debieran ser destinados a la ayuda de las poblaciones más desheredadas, acabarían nutriendo los fondos destinados a la compra de material militar. Es la locura armamentista del Tercer Mundo que perpetúa la triste suerte de millones de seres, sacrificados al dios Marte. Mientras tanto, el presupuesto anterior—debido fundamentalmente a la guerra con el Pakistán—había acabado con un déficit de 5.500 millones de rupias, y, para cubrir los ingresos, se aplicaban nuevos impuestos a los cigarrillos, la gasolina, frigoríficos y otros artículos de «lujo», así como se aumentaban los derechos aduaneros. Como aireaba la prensa comunista—con evidente sagacidad—, los gastos de los servicios sociales, sanidad, educación y planeamiento familiar se hallaban en retroceso, mientras que aumentaban los destinados a la policía e información.

En otro orden de cosas, el 19 de abril de 1973, el Tribunal Supremo anulaba las disposiciones legislativas, promulgadas en 1971 por el Gobierno, que autorizaban la detención preventiva por un período de tres meses a dos años. En virtud de esta sentencia, eran puestos inmediatamente en libertad 1.800 naxalitas (maoístas) y comunistas marxistas que se encontraban detenidos en Bengala occidental. Se calculaba que otros 12.000 naxalitas tendrían que beneficiarse de esta resolución si se demostraba que estaban encarcelados por motivos políticos.

El Tribunal Supremo dictaba otra sentencia el 24 de abril, en virtud de la cual se autorizaba al Parlamento a enmendar la Constitución de la Unión en lo referente a los derechos fundamentales. Esto significaba la desaparición de uno de los principales obstáculos para radicalizar la política económica y social, ya que, en virtud de la sentencia, el Gobierno podría presentar al Parlamento leyes que afectasen al derecho de propiedad y favoreciesen las transformaciones sociales. Hasta entonces, el Congreso se excusaba arguyendo que el Parlamento no disponía de poderes suficientes para poner en práctica sus proyectos de reforma.

Respecto a la política exterior, en 1973 se abordaban, principalmente, tres aspectos: liquidación de las secuelas de la guerra con el Pakistán, relaciones con los Estados Unidos y política de no alineación.

Respecto a la primera de estas cuestiones, Nueva Delhi se aplicaba intensamente para solucionar las tensiones entre Dacca e Islamabad. Bangla Desh retenía a unos 200.000 biharis que habían optado por la nacionalidad pakistaní y a los cuales el Gobierno de Dacca se negaba a autorizar el retorno a su patria. Nueva Delhi aspiraba, para resolver el conflicto, a que fueran canjeados por los bengalíes retenidos en el Pakistán, a lo que se negaba el Gobierno de Islamabad, por considerar que el problema recaía bajo la responsabilidad de Bangla Desh. La India concedía facilidades de tránsito a 15.000 bengalíes civiles retenidos en el Pakistán y que serían intercambiados en breve por las mujeres e hijos de los internados civiles y de los prisioneros de guerra pakistaníes detenidos en la India. En una segunda fase, Nueva Delhi proyectaba liberar, gradualmente, a los prisioneros de guerra, exceptuando a los que Dacca consideraba culpables de «atrocidades», y que pretendía someter a juicio.

Dacca, mientras tanto, se negaba a todo diálogo con Islamabad mientras que esta capital no reconociese formalmente a Bangla Desh. Insistía en el juicio de los «criminales de guerra» y exigía que el Pakistán acogiese a los biharis que habían optado por dicha nacionalidad. Para no encontrar las diferencias, la Unión India se había negado a entregar a Dacca a los pakistaníes que pretendía someter a juicio el Gobierno de Mujibur Rahman. Pero esta conducta amenazaba con provocar una tensión indo-bengalí. Ciertamente, había conseguido que las reclamaciones de Dacca se redujeran, de los 1.500 «criminales» que exigía que le fueran entregados en un principio, a poco más de un centenar. Pero temía, fundadamente, que, si los entregaba a sus enemigos, se elevarían censuras en la prensa extranjera, lo que podría redundar en una disminución de la ayuda exterior que recibe.

Por fin, en agosto se firmaba un acuerdo tripartito en la capital india, y el 19 de septiembre comenzaba un importante intercambio de poblaciones. Según las cláusulas del acuerdo, 300.000 personas (bengalíes, biharis y prisioneros de guerra pakistaníes) deberían ser repatriados en los meses sucesivos. Antes de fin de septiembre, 2.000 bengalíes retenidos en el Pakistán eran reintegrados por avión a su país. Simultáneamente, otros 2.600 pakistaníes retenidos en Bangla Desh retornaban a la patria. Según el acuerdo de Nueva Delhi, era a la India la que correspondía la responsabilidad de organizar, en contacto con Islamabad, Dacca y la ONU, esos movimientos de población. La ejecución de los traslados experimentó diversas alternati-

vas, debido a la insuficiencia de los medios de transporte, a distintas interpretaciones y a resquemores surgidos.

En cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, en febrero de 1973, Indira Gandhi declaraba que «los salvajes bombardeos padecidos por Vietnam del Norte no hubieran sido tolerados tanto tiempo si el pueblo hubiese sido europeo». La primer ministro parecía olvidar que otros bombardeos, mucho más mortíferos e incluso injustificados (como el de Dresden), se habían experimentado durante la II Guerra Mundial en Inglaterra, Alemania, Polonia o Austria, pueblos todos europeos. Lo cierto es que Washington reaccionó con indignación. El nuevo embajador norteamericano en la India, Moynihan, que se aprestaba a trasladarse a Nueva Delhi, recibió órdenes de demorar el viaje por tiempo indefinido. Las relaciones indo-americanas, que habían entrado en un período de frialdad con motivo de la guerra con el Pakistán, ofrecían una tensión adicional con las injustificadas declaraciones de Indira Gandhi. Dos meses más tarde, el 20 y 21 de abril, dos altos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano —Rush y Sisco— se entrevistaban en Nueva Delhi con los gobernantes indios. El hecho de que Washington hubiese restablecido la ayuda a la India, suspendida desde la guerra con el Pakistán, parecía indicar el interés norteamericano en restablecer las buenas relaciones. El ministro indio de Hacienda Y. D. Chavan, había declarado en el Parlamento: «Cuando los Estados Unidos han congelado unilateralmente los créditos, hemos protestado. No obstante, si los han restablecido, es buena cosa.» Tales créditos alcanzaban un volumen de 87,5 millones de dólares, que resultaban muy necesarios en el actual estado de cosas, puesto que estaban destinados a la adquisición en los Estados Unidos de abonos o fábricas de abonos, así como equipos para la producción de energía, que, al ser insuficientes en la India, alcanzaban suma importancia. El gesto norteamericano había provocado dos reacciones muy distintas: los sectores de la izquierda del Congreso reclamaban que se rechazara la ayuda de Washington, mientras que la derecha recomendaba una actitud más flexible de Nueva Delhi y recordaba que más de la mitad de la ayuda exterior recibida por la India desde la independencia había sido proporcionada por los Estados Unidos. Este último criterio parecía prevalecer. Así, la primer ministro había dirigido al presidente Nixon un caluroso telegrama de felicitación con motivo de su reelección. Moynihan, una vez que había tomado posesión de la Embajada, había contribuido decisivamente a restablecer el clima amistoso.

Respecto a la política de no alineación, a pesar de los recientes avatares, la Unión India persistía en considerarla como el eje de su política exterior. De tal forma, había tomado una parte muy destacada en la preparación de la conferencia que se celebraba en Argel en 1973. La desaparición de Nehru—cofundador del movimiento con Nasser y Tito—había redundado en la disminución del dirigismo indio, en ese bloque que el pandit consideraba que se caracterizaba «más bien por una actitud que por una política». La influencia moral de la India se había debilitado a consecuencia de la guerra pakistani, principalmente, pero Indira Gandhi consideraba que resultaba necesario recuperar el prestigio perdido entre el grupo de naciones congregadas en la capital argelina. Y, para ello, a pesar de la inmensa tarea que tenía en Nueva Delhi, volaba a Argel. El reciente acuerdo tripartito que normalizaba las relaciones en el subcontinente indostano había despejado muchas suspicacias y había contribuido a realzar el prestigio personal de la primer ministro. No obstante, subsistía la desconfianza originada por el tratado indo-soviético de agosto de 1971, aunque, para atenuar los recelos, Nueva Delhi procuraba resaltar claramente su independencia de criterios frente a Moscú, y esto se advertía especialmente en la frialdad con que la India acogía las reiteradas propuestas soviéticas acerca del sistema de seguridad colectiva en Asia. Indira Gandhi, antes de su marcha a Argel, reiteraba que la Unión India no formaba parte de ninguna alianza militar y que no autorizaría la instalación de bases extranjeras en su territorio.

* * *

El último trimestre de 1973 presentaba un balance inquietante en la Unión India. Se acentuaba la crisis económica y social y se extendían las protestas ocasionadas por la falta de alimentos y el alza de los precios, que habían subido del 20 al 25 por 100 en el transcurso de un año. Especialmente la decisión de encargar al Estado el comercio al por mayor del trigo—según se había decidido en la asamblea de Calcuta—había resultado un fracaso. Una gran parte de los agricultores se negaban a entregar sus cosechas a las agencias públicas de distribución y se guardaban el grano para especular a su conveniencia. Todo esto producía un alza de los precios, mientras que las reservas estatales de cereales resultaban insuficientes para abastecer los almacenes populares. La consecuencia visible era una oleada de protestas. El fracaso de la transferencia al Estado del comercio del trigo obligaba al

Gobierno a demorar la aplicación de una medida semejante sobre el arroz. Para mayor desdicha, la decisión de importar cereales extranjeros se adoptaba con retraso, es decir, que se producía en el momento en que aquéllos habían alcanzado mayor precio en los mercados internacionales y cuando las reservas mundiales estaban prácticamente agotadas, por lo que no se encontraban los tonelajes que pretendía adquirir en Australia o Canadá. Para hacer frente a sus compromisos, Nueva Delhi solicitaba un préstamo de 200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y se veía obligada a reducir la importación de productos petrolíferos, equipos y piezas de recambio para ahorrar divisas, con lo que se comprometía el desarrollo industrial².

La economía india atravesaba por momentos de inusitada gravedad. El Gobierno dictaba medidas de austeridad en la Administración (limitación de actos oficiales, reducción de los viajes al extranjero, restricción en el uso de vehículos oficiales, etc.), pero el mal era demasiado profundo para que fuera contenido por medios superficiales. En el otoño de 1973 cualquier observador atento de las realidades descubría que la Unión India se hallaba aquejada de una grave dolencia. Indira Gandhi se veía obligada a mostrar cautela en sus veleidades progresistas ante el temor de radicalizar la crisis socioeconómica, que atribuía, en parte no despreciable, «a los elementos reaccionarios» del Congreso. Pero la realidad venía demostrando que el factor fundamental que había contribuido al desolador panorama consistía en las dudas y ambigüedades gubernamentales.

Durante la reunión de Delhi se demostraba un fermento de crisis política. Indira Gandhi lanzaba duras acusaciones a sus partidarios, deplorando que, después de veinticinco años, los diputados del Congreso no hubiesen creído necesario plantar árboles en el Rajasthan para frenar la progresión del desierto. Este ejemplo que citaba es sobremanera significativo, porque revela que los dirigentes del partido gubernamental y los diputados del Parlamento, en vez de atender a remediar los grandes problemas—aquellos de los cuales depende la vida de millones de seres, que mueren anualmente víctimas de esta incuria—, dedican sus energías y su tiempo a cabildeos políticos de menor cuantía. La comprobación de la importancia que implica un cambio radical de orientación movía a Indira a preguntarse: «Me doy cuenta de que esto debe cambiar, pero ¿cómo? Nadie parece tener ideas claras en esta cuestión.» Ahí reside el trágico dilema que se alza sobre el porvenir del inmenso país: que no podrá continuar como hasta el momento, porque

² GÉRARD VIRATTELLE, *Le Monde*, 21 septiembre 1973.

cada año que transcurra se agravará esta crisis fenomenal, y que, por otra parte, ninguno de sus grandes dirigentes dispone de la imaginación suficiente como para introducir cambios radicales, drásticos, en la forma y en el fondo. Y si la Unión India no experimenta rápidamente un cambio que se traduzca en una mayor eficacia de las decisiones, una positiva efectividad, otras fuerzas políticas distintas del Congreso, probablemente bajo el signo de Moscú o de Pekín, procederán a arrumbar las viejas estructuras parlamentarias, que tan ineficaces se muestran, para acometer la ingente tarea que se alza como un desafío en el horizonte político.

Realmente, la situación al finalizar 1973 mostraba signos de gravedad insuperable. Es algo evidente, reconocido por todos los que auscultan la realidad. «La mayor parte de nosotros—escribía *Times of India*—hemos aceptado parcial o totalmente la filosofía que conduce al estancamiento económico, a la indisciplina industrial, la inflación y la miseria.» El periódico conservador afirmaba que la señora Gandhi no podía ser acusada de único responsable de esta situación y explicaba que «las cosas van mal» por tres razones: la incapacidad de los dirigentes como clase a acomodarse a las duras realidades, la extensión de los controles burocráticos en nombre del socialismo y la carga insoportable que representa el masivo incremento de la población, así como el hecho de que el Gobierno concede atención prioritaria al control de los nacimientos. Algo realmente grave está sucediendo en la India. Aunque no se muestren en la superficie, existen corrientes subterráneas de mucha potencia que un día, súbitamente, devastarán las actuales estructuras políticas. La experiencia demuestra que el sistema parlamentario no es apto para el crucial momento político del país.

A consecuencia de tan diversos factores de crisis, el conjunto del territorio nacional se encontraba plenamente convulsionado. Uttar Pradesh—que, con sus 90 millones de habitantes, constituye el Estado más poblado de la India—tuvo que ser sometido a administración directa el 14 de junio de 1973 a consecuencia del amotinamiento de las fuerzas paramilitares de la policía y de la dimisión forzada de Kamalapati Tripathi, que permanecía veintiséis meses al frente del Gobierno. Uno de los errores que se le reprochan a Tripathi consistía en su fracaso en el terreno económico. Poseyendo Uttar Pradesh algunas de las tierras más fértiles de la llanura del Ganges, cuenta con 36 distritos «atrasados», de un total de 54, y a pesar de la buena red hidráulica, el agua potable sólo llega a la doceava parte de los núcleos urbanos. El 10 de noviembre siguiente, Uttar Pradesh retornaba al régimen

parlamentario, y el Partido del Congreso, mayoritario, volvía a hacerse cargo del poder. Afortunadamente, durante el período de administración directa no se habían producido turbulencias, que allí revestirían particular gravedad, dado el gran número de intocables y musulmanes que lo habitan. Estos últimos cuentan con las universidades islámicas de Aligarh y Benares, la principal ciudad santa del hinduismo. La solución de la crisis representaba un alivio para el Gobierno de Indira Gandhi por la importancia que tiene este Estado, de donde eran originarios todos los primeros ministros indios y que envía más representantes al Parlamento central que ningún otro Estado de la Unión. El éxito gubernamental se confirmaba al obtener la mayoría absoluta, más del 50 por 100 de los votos, en las elecciones de febrero de 1974.

Las dificultades alimenticias e inflacionarias por las que atravesaba la India determinaron otros conflictos, de no menor gravedad que los anteriores, que contribuyeron a convulsionar el país. Entre ellos, la agitación laboral en el Estado de Maharashtra, cuya capital es Bombay, donde un millón de obreros cesaron de trabajar en enero de 1974 para protestar contra el alza de los precios. Indira Gandhi, que pronunciaba un discurso ante 300.000 personas en Nagpur, tuvo que retirarse, protegida por la policía, cuando la multitud comenzó a lanzarle zapatos y sandalias. Seis personas resultaron muertas en un choque con la policía en otra ciudad del Estado, Wani, donde los huelguistas trataban de asaltar un edificio oficial. En este mismo Estado, grupos armados de hindúes de las castas más elevadas perseguían a los miembros de la organización militar de los intocables budistas, los «Dalit Panthers» (panteras oprimidos). Apenas iniciado el año, el 10 de enero de 1974, el Estado de Guyerate entró en una fermentación que no ha cesado todavía. Ese día se congregaban grandes multitudes en Baroda, Sabarbantha y Ahmedabad, manifestando tumultuosamente su protesta contra el alza de los precios, que habían crecido un 23 por 100 en 1973, según los datos oficiales. La policía disparaba contra la muchedumbre y seis personas resultaban muertas. Al propio tiempo, todos los estudiantes de la oposición, tanto de derechas como de izquierdas, se declaraban en huelga general.

Los disturbios del Guyerate revelaban la profunda miseria en que se encontraban centenares de millones de seres. La constante alza de los precios resultaba ser la consecuencia de la penuria de productos alimenticios, especialmente cereales, que existe en el país. Se trata de un déficit crónico, cuyas dimensiones, en vez de atenuarse, se agravan cada año que transcurre

en virtud del fabuloso incremento demográfico. El nivel extraordinario que alcanzó la cosecha en 1970-71 (108,4 millones de toneladas) era la cantidad que cinco años antes los expertos consideraban necesaria para abastecer a toda la población, satisfaciendo sus mínimas necesidades. Pero mientras tanto la población había crecido en más de 50 millones de habitantes. De tal forma, cada año el problema se agrava más, resultando ya prácticamente imposible alimentar a esta masa y a los 10 ó 15 millones de nuevas bocas que surgen todos los años, por lo que el malestar adopta caracteres agudos. Cada año existen menos alimentos, en proporción a la población, y la consecuencia inevitable es el hambre y el descontento. El Gobierno central poco puede hacer para remediar esta situación trágica. Tratando de contener la explosión demográfica—sin lo cual es imposible contemplar otras soluciones—, puso en marcha el plan de esterilización. En los primeros momentos ofrecía a las personas que accedían voluntariamente a la esterilización un transistor y cierta cantidad de rupias. Después suprimió ese tipo de compensación y lo sustituyó por una campaña sistemática de información que precede a la instalación en cada pueblo de pequeños hospitales móviles, en los que se practica la operación. Pero los resultados son desalentadores, ya que en los últimos tres años sólo se han prestado voluntariamente a la esterilización 10 millones de personas, registrándose una fuerte oposición a causa de convicciones religiosas y de orgullos personales.

Así se comprende, teniendo en cuenta los datos demográficos, que existiese en la Unión India tan acusada penuria de cereales, por cuanto que ese año las cosechas después del monzón habían sido buenas, aunque no excelentes, en las regiones occidentales del subcontinente. Pero el aumento de población exige cada vez mayores cantidades de cereales, y esto resulta imposible de conseguir. Ciertamente que algunos grandes agricultores habían almacenado su cosecha, esperando obtener mayores ganancias; pero subsiste el hecho de que la India no puede autoabastecerse de alimentos y el déficit resulta mayor cada año que transcurre.

El 18 de enero se reproducían los disturbios de Guyerate. Esta vez correspondió a Rajkot ser el teatro de graves desórdenes, durante los cuales la multitud, que se manifestaba contra el alza de los precios, incendiaba y saqueaba más de 50 edificios y tiendas de comestibles. Otras 10 personas resultaban muertas por los disparos de la policía y el ambiente se tornaba amenazador. Otras dos personas resultaban muertas y cinco heridas en disturbios similares registrados el día 21 en Surat. En dos semanas, 20 per-

sonas habían perdido la vida en este clima de tensiones y se había impuesto el toque de queda en más de 15 centros urbanos del Guyerate.

Ante las crecientes dificultades económicas, la situación social se deterioraba a pasos agigantados y la policía se mostraba cada vez más ruda en la represión, lo que motivaba las críticas de un amplio sector de la prensa³.

Pero las dificultades resultaban tan amplias, que el Gobierno se encontraba en la imposibilidad de atenderlas. El sector industrial había quedado seriamente afectado por las dificultades energéticas originadas a consecuencia de la guerra árabe-israelí. Nueva Delhi dirigía a Moscú una angustiosa llamada para que incrementara el suministro de petróleo. No obstante, el viceministro soviético de Comercio Exterior, Grichine, declaraba en la capital india que resultaba imposible acceder a esta petición debido a las dificultades que experimentaba la Unión Soviética en el abastecimiento propio, aunque concedería a la India un millón de toneladas de keroseno y 100.000 de gas-oil.

El 9 de febrero, ante la alarmante situación, el Gobierno federal decidía hacerse cargo directamente de la administración de Guyerate. Desde principios del año 1974, más de 60 personas habían perecido durante los continuos tumultos; los centros de enseñanza estaban clausurados; los daños causados por saqueos e incendios eran considerables, y el toque de queda estaba implantado en la mayoría de los centros urbanos, cuya custodia había sido confiada al ejército. El panorama resultaba muy preocupante, incluso en un país tan turbulento como la India.

Al actual estado de cosas habían contribuido diversos factores, que es preciso tener en cuenta en el momento en que se pretenda emitir un diagnóstico de la enfermedad que aqueja a la India de hoy. De una parte, la insuficiencia de alimentos y el consiguiente alza de los precios. También la existencia de un numeroso proletariado industrial—que en Guyerate está principalmente empleado en la industria textil—que estaba siendo objeto de la atención preferente de los grupos políticos más extremistas. Simultáneamente, la crisis energética, que—en la India como en el resto del mundo—había ocasionado el cierre de establecimientos, la reducción de las jornadas laborales y, en definitiva, el paro creciente. Junto a todos estos factores, la conducta antisocial de ciertos núcleos de la población, especialmente la sordidez y avaricia de los grandes terratenientes, dispuestos a explotar el

³ El *Times of India* y el *Indian Express* señalaban la violencia con que la policía de Bombay había dispersado una manifestación de parias el día 5, matando a uno e hiriendo a varios centenares, empleando porras y las culatas de los fusiles. El *Economic and Politic Weekly* hablaba incluso de «fascismo larvado».

hambre colectiva. Como afirmaba Viratelle, «se ha asistido a la conjunción de tres movimientos de protesta: el de los terratenientes y los fabricantes de aceite vegetal y los mayoristas de cereales y de aceite que intentan dictar sus leyes al Gobierno local (los latifundistas, por ejemplo, conservan sus cosechas para especular sobre los precios, contribuyendo así a la penuria; se oponen también a la fijación de un límite en la extensión de las propiedades y a un impuesto sobre el arroz); el de los miembros de la familia política congresista, que intentan recuperar el poder que perdieron hace seis meses, y, finalmente, el movimiento más combativo, el de los estudiantes, que reclaman el cese de varios ministros, acusados de corrupción»⁴.

Los estudiantes, efectivamente, habían sido el principal motor de la agitación en Guyerate y quienes, en definitiva, habían provocado la dimisión del ineficaz y corrupto Gobierno de Ahmedabad, cuyo presidente, Patel, gozaba de fama de venalidad en el ejercicio de su cargo. Los estudiantes —reagrupados en una Asociación juvenil titulada «Yuvak Navnirman Samity»— fueron quienes tomaron la iniciativa de las manifestaciones y quienes arrastraron a las clases medias, afectadas por la inflación, a pregonar su descontento públicamente. Un periodista de *All India Radio* declaraba que «por primera vez en la India ha aparecido un poder estudiantil». Este acontecimiento reviste la mayor trascendencia para el futuro del país, que cuenta con el 66 por 100 de la población menor de treinta años. Comprendiendo el alcance de la situación, Indira Gandhi, que había declarado a principios de año que no cedería ante la violencia, hubo de reconsiderar su decisión para acabar exigiendo la dimisión de Patel y su Gobierno.

Pero tampoco la administración directa calmaba la agitación de Guyerate. Las violencias continuaban enturbiando el panorama. El 27 de febrero, en tres ciudades diferentes, se repetían las manifestaciones, saldadas con cuatro personas muertas, y el 9 de marzo eran detenidos 200 estudiantes guyeratis que se manifestaban ante el Parlamento en Nueva Delhi. Para protestar contra los arrestos y apoyar las reivindicaciones del Estado, el ex viceprimer ministro Morarji Desai iniciaba una huelga de hambre. El movimiento de desobediencia civil, encabezado por los estudiantes, reiteraba su última reivindicación antes de retornar a la tranquilidad. La demanda consistía en la disolución de la Asamblea local, dominada por viejos políticos corrompidos y desacreditados. El 15 de marzo Nueva Delhi se inclinaba ante el clamor

⁴ GÉRARD VIRATELLE: «La grave crise de l'Etat du Goudjerat a montré le mécontentement de la jeunesse», *Le Monde*, 13 febrero 1974.

popular y procedía a disolver a la Asamblea. Por esas fechas los disturbios habían causado ya 80 muertos y grandes devastaciones. Al conocerse la noticia de la disolución del Parlamento, millares de estudiantes se lanzaron a las calles de Ahmedabad para expresar su alegría.

Por esas fechas, al contemplar el panorama de agitación y turbulencia en que se debatía una gran parte del territorio de la Unión India; al aquilatar las muestras de desagrado con que eran acogidas las apariciones públicas de la primer ministro, resultaba natural deducir que «la popularidad de la señora Gandhi se encontraba en su punto más bajo»⁵. De confirmarse esa apreciación en un momento tan delicado, cuando se desarrollaban las elecciones para renovar las Asambleas legislativas provinciales de cuatro Estados y un territorio, cabía esperar una catástrofe nacional, puesto que el Partido del Congreso, con todos sus defectos, es el único vínculo que mantiene la unión entre Estados tan heterogéneos. Su derrota o desaparición significaría que todo el subcontinente quedaría entregado al caos.

Para hacer frente con éxito a las crecientes exigencias del electorado era preciso modificar sustancialmente los cuadros dirigentes del Partido en los diferentes Estados. El electorado votaba fundamentalmente a las personas y no a la organización política. Y el Partido del Congreso arrastraba la rémora de que una parte de sus dirigentes provinciales eran veteranos políticos que se habían desacreditado por largos años de ejercicio del poder y su historial no siempre resultaba immaculado. El mérito de Indira Gandhi —demostrado cuando rompió con el viejo Congreso— es que sabe adoptar soluciones expeditivas cuando las circunstancias lo requieren. Ahora, en plenos comicios electorales, al palpar el disgusto del electorado de varios Estados, supo proceder adecuadamente, rehusando presentar la candidatura de un centenar de viejos políticos y procediendo a designar gentes nuevas, en gran parte relativamente jóvenes, a las que no se podía, por tanto, atribuir ninguna culpa en los pasados errores. Esto suponía reconquistar la confianza de amplios sectores. Completando esta maniobra, duplicaba su atención a aquellos núcleos de la población que tradicionalmente votaban por el Partido (campesinos, intocables, musulmanes, etc.).

El éxito coronaba una vez más los perspicaces esfuerzos de Indira Gandhi. En Uttar Pradesh obtenía la mayoría absoluta, y también en Orissa formaba Gobierno con el apoyo de su aliado electoral, el Partido Comunista pro sovié-

⁵ GÉRARD VIRATTELLE: «La popularité de Mme. Gandhi est au plus bas», *Le Monde*, 20 febrero 1974.

JULIO COLA ALBERICH

tico. Por el contrario, en Manipur el Congreso y en Nagaland una organización de inspiración congresista resultaban derrotados. En el territorio de Pondichery, el potente partido Dravida Munnetra Kazhagam resultaba derrotado al obtener sólo dos escaños de los 30 de la Asamblea.

Las elecciones habían reafirmado que el Congreso seguía siendo el pivote en que se asienta la vida política de la Unión India y que no existe otra organización de recambio.

JULIO COLA ALBERICH

N O T A S

